

El campo mexicano: Revertir el castigo

SERGIO SARMIENTO

El sector agrícola representa el mayor fracaso del sistema político mexicano. También es sin duda el más irónico de los fracasos.

La verdadera Revolución Mexicana la hicieron los campesinos. En 1910 el país no contaba todavía con una fuerza industrial que pudiese nutrir a los ejércitos revolucionarios. La carne de cañón surgió necesariamente entre el campesinado.

Sin embargo, este sector ha sido el más afectado por las desigualdades del régimen de la Revolución. Los indicadores sociales del país muestran un avance significativo a lo largo de las últimas décadas en las condiciones de vida de los trabajadores urbanos. En contraste, el campo se antoja una verdadera zona de desastre.

Según el último censo nacional, en 1990 México contaba con una población cercana a los 81 millones 500 mil habitantes; de este total, 22 millones, o sea 27.4 por ciento, vivían en comunidades rurales.

Hay países desarrollados que tienen también porcentajes elevados de población rural. Tal es el caso, por ejemplo, de Francia y Estados Unidos, donde se alcanzan niveles superiores al 20 por ciento. En este sentido se distinguen de países como el Reino Unido, donde solamente 8.5 por ciento de los habitantes vive en el área rural.

Sin embargo, la gran diferencia entre México y países como Francia o Estados Unidos no se encuentra en el porcentaje de población rural, sino en el número de personas que se dedican directamente a las labores agrícolas. Buena parte de la población rural de Estados Unidos o de Francia no trabaja directamente en el campo, sino en industrias ligeras vinculadas a la producción agraria o en los servicios. En México, debido a una política miope, se le ha dejado a los campesinos sólo dos opciones: trabajar en miniparcelas, que apenas alcanzan para abastecer a nivel de autoconsumo, o migrar a las grandes urbes nacionales o a Estados Unidos.

En México, el 21 por ciento de la fuerza laboral realizaba trabajos agrícolas en 1990. Pero este gran ejército de campesinos apenas producía el 8.9 por ciento del Producto Interno Bruto. Así, se requería una quinta parte de la fuerza laboral nacional para producir menos de una décima de todos los bienes y servicios que se generan en el país. Debido a que la producción del campo ha declinado, mientras que la de la industria y los servicios ha aumentado ligeramente, esta situación se ha deteriorado en los últimos tres años.

Cinco millones 500 mil personas trabajan directamente en el campo mexicano. En contraste, la fuerza laboral agrícola en Estados Unidos apenas alcanza los 3 millones 500 mil personas; pero esos estadounidenses generan una producción final con valor de 99 mil 800 millones de dólares. En cambio, los 5 millones y medio de campesinos mexicanos producen apenas 18 mil 400 millones de dólares, menos de una quinta parte de lo que se logra en el vecino país del norte con una fuerza laboral 36 por ciento inferior.

Hay otra forma de ver este asunto. Cada trabajador del campo en Estados Unidos acumula, al final de un año, una producción de 28 mil 500 dólares. En contraste, el campesino de México, a pesar de tener la posibilidad de generar cosechas de invierno en casi todo el territorio nacional, lo cual no ocurre en el campo estadounidense, produce apenas 3 mil 345 dólares en un año. El trabajador agrícola promedio allende el Bravo es así nueve veces más "productivo" que el mexicano.

No faltará quien afirme que la diferencia en productividad se debe a que los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son rubios y los de México morenos. Pero eso es una falsedad. Quien haya visitado alguna vez los campos estadounidenses se habrá dado cuenta de que la mayoría de quienes laboran allí son mexicanos. El problema, entonces, radica en otros factores.

A lo largo de los años, y a pesar de la deuda contraída con los campesinos en la Revolución Mexicana, la administración pública nacional ha mantenido una política destinada a favorecer a las ciudades y a la industria a costa del campo. Los controles de precios y de producción desmotivaron durante mucho tiempo la inversión, en tanto que la política ejidal, destinada a generar votos en el sector rural al mantener a los agricultores bajo el constante control del partido hegemónico, fragmentó de manera dramática la tierra en un momento en que en otros países se elevaba la productividad creando grandes unidades rurales.

En lugar de compensar por otros medios este castigo que injustamente se aplicaba, el gobierno siempre subsidió la vida urbana ante la del campo. Paradójicamente, los precios del transporte, la tortilla y otros productos y servicios han sido siempre inferiores en el Distrito Federal y otras áreas urbanas, y en buena medida esto ha sido producto de transferencias presupuestarias abiertas o encubiertas.

El programa Procampo, dado a conocer el 4 de octubre, constituye un intento por revertir el castigo tradicional al campo. Representa una medida adicional a otras anunciadas con anterioridad, como la modificación de la legislación sobre la tenencia de la tierra, las cuales no habían tenido todavía consecuencias positivas sobre la producción agrícola. El sector primario, efectivamente, es el que peor desempeño presenta

actualmente en una economía agobiada por la desaceleración.

El gobierno de la república ha escogido como instrumento fundamental del Procampo la entrega de subsidios directos -en forma de cheques nominales- a los agricultores. El monto de estos apoyos dependerá de la superficie de terreno a cargo de cada uno.

Estos subsidios, sin embargo, están destinados a suavizar el golpe que sin duda significará la desaparición gradual de los precios nacionales de garantía para los granos, los cuales son superiores a los promedios que se pagan en el mercado internacional.

La decisión de encauzar estos subsidios puede ser conveniente de momento, en especial porque compensarán los apoyos que los gobiernos de los competidores comerciales otorgan a sus agricultores. Además, facilitará el esfuerzo por lograr que los campesinos voten el próximo 21 de agosto por el partido en el poder, incluso en un momento en que los precios de garantía estarán en proceso de desaparición. A largo plazo, sin embargo, el problema productivo del campo no se resolverá con estos subsidios.

La escasa productividad del agro mexicano sólo se incrementará con una mayor inversión y con una ampliación de las dimensiones de las unidades productivas. Para conseguir la inversión es necesario acabar con la desconfianza del inversionista ante el campo y del campesino ante el "capitalista", que se remonta muchas décadas en la historia nacional. Para ampliar las unidades productivas es indispensable eliminar un sistema económico y político que ha confundido la fragmentación de las tierras con una virtud.

Algunas de las medidas económicas que se han tomado en los últimos tiempos bien podrían ayudar al logro de estos objetivos. Pero es muy largo el camino por andar. Cuando la productividad en el campo al norte del río Bravo es nueve veces superior a la mexicana, pese a que la mano de obra es virtualmente la misma, es necesario cuestionar muchos de los dogmas que se han implantado en México a lo largo de este siglo. Estos dogmas se crearon con la idea de que beneficiarían al campesino a largo plazo, y hay muchos hombres de campo que así lo siguen considerando. El resultado final que han tenido, sin embargo, es el contrario al que pretendieron: han marginado al campo mexicano de un desarrollo que le correspondía desde hace mucho tiempo por derecho propio.

Cuadro 1

DEMOGRAFIA DEL CAMPO					
	México	Estados Unidos	Francia	Reino Unido	Alemania
Población nacional	81,500,000	252,000,000	56,600,000	55,486,000	78,113,000
Población rural	27.4%	22.5%	25.7%	8.5%	14.7%

Cuadro 2

ESTRUCTURA LABORAL DEL CAMPO		
	México	Estados Unidos
Trabajadores agrícolas	5,500,000	3,566,000
Fuerza laboral	21%	2.8%
Producción agrícola	8.9% del PIB	2.1% del PIB
Valor de producción	18,400 millones de dls.	99,800 millones de dls.